

Mayo – agosto 2001

Neoliberalismo, crisis y resistencias sociales en América Latina: las configuraciones de la protesta¹



Por José Seoane, Emilio Taddei y Clara Algranati

■ El crecimiento de la protesta social



A lo largo del segundo cuatrimestre de 2001 las acciones de conflicto se multiplican y crecen significativamente en la región latinoamericana. En términos cuantitativos los registros de protesta contabilizados por el OSAL para dieciocho países latinoamericanos se incrementan en un 64% en relación con los primeros cuatro meses del año, pasando de 1.221 hechos a 2.003. Este proceso adopta un carácter general verificándose, en distintas proporciones, en la amplia mayoría de los casos nacionales considerados. En este sentido, vale señalar que sólo dos países (Venezuela y Puerto Rico) muestran registros menores a los del período anterior (enero-mayo). El incremento de las movilizaciones, huelgas y bloqueos de rutas impulsadas por distintos colectivos y organizaciones se manifiestan –como ya lo habíamos señalado en el número pasado– en un contexto regional signado por la expansión y agravamiento de la crisis económica. En respuesta al deterioro social que ésta implica y a los intentos, por parte de la mayoría de los gobiernos de la región, de responder a esta situación con políticas de corte neoliberal –particularmente de reducción del gasto fiscal–, el aumento de la conflictividad social muestra características particulares. Sus configuraciones dan cuenta tanto del complejo mapa de relaciones de fuerza entre los distintos

agrupamientos sociales en el orden nacional como de las intensidades y formas que adopta la disputa sobre las consecuencias, la gestión y las alternativas a la crisis del modelo neoliberal. Es el propósito de este artículo no sólo introducir a la lectura de las cronologías del conflicto social para el período mayo-agosto de 2001, que se acompañan a continuación², sino también reseñar algunas reflexiones sobre las características destacadas que presenta el aumento de las acciones de protesta.

Como una primera aproximación a esta cuestión vale señalar que, en términos de su distribución territorial, este incremento general de las luchas resulta proporcionalmente más significativo para el Cono Sur, Centroamérica y México. Esto se expresa, en cierto sentido, también en los actores colectivos que protagonizan los enfrentamientos. Si bien el movimiento campesino guarda una presencia importante –representa un 8,4% de todos los hechos consignados– son las acciones impulsadas por los asalariados, los estudiantes y los pequeños productores las que se intensifican significativamente en este período. Abarcando más de un tercio de los hechos de lucha, las protestas encabezadas por las organizaciones de trabajadores crecieron en un 80%, siendo que aquellas realizadas por los empleados del sector público se duplicaron en relación al primer cuatrimestre del año. En similar proporción –un 88%– se incrementaron las protestas de estudiantes y pequeños productores –particularmente agrarios– aunque su peso en el

conjunto de protestas es sensiblemente menor (8% y 9% respectivamente).

La mayoría de estas luchas responden al cuestionamiento de las políticas de ajuste fiscal y del regresivo impacto social resultado de la aplicación del modelo neoliberal en la región. Del conjunto se destacan, entre otras, la larga serie de cortes de ruta y huelgas impulsados por las organizaciones sindicales –fundamentalmente del sector público– y el movimiento de desocupados contra las políticas de ajuste en Argentina, las distintas huelgas del sector público en Brasil, el extendido conflicto docente y los bloqueos de caminos realizados por el movimiento campesino indígena del altiplano en Bolivia, las acciones de los estudiantes y del movimiento mapuche en Chile, la cadena de protestas agrarias en México y Colombia, y el ciclo de movilizaciones multisectoriales en Guatemala contra el incremento del IVA. Sin embargo, a diferencia de cuatrimestres anteriores, la conflictividad del período que analizamos –la más significativa en términos de los registros contabilizados por el OSAL desde mayo de 2000– parece presentar una configuración extendida –en series prolongadas de un mismo conflicto o en diversidad de protestas particulares–, articuladas muchas veces en forma de redes y con puntos de condensación de las protestas a nivel nacional significativos pero que parecen no alcanzar el grado de impacto y cuestionamiento político de otros procesos referidos en los cuatrimestres pasados.

Finalmente, en relación a las formas predominantes que adopta, es válido destacar la relativa importancia que asumen modalidades como los bloqueos de carreteras, las marchas prolongadas y los paros extendidos –aún en su forma de huelga por tiempo indeterminado. Intentaremos a continuación presentar un análisis más detenido de estas características.

■ Las políticas de ajuste ante la crisis y las protestas sociales

En el marco de la propagación del ciclo de crisis financieras abierto hacia fines de 1997 en el sudeste asiático, su impacto en los países centrales y su transformación en crisis económica (Chesnais, 2001), las economías

latinoamericanas inspiradas en el recetario neoliberal enfrentan hoy tanto la desaceleración del crecimiento o lisa y llanamente la recesión prolongada como en el caso de la Argentina, como amplias restricciones en el acceso al crédito internacional, que en el pasado alimentó, entre otras cosas, el incremento de la abultada deuda externa de la región. En este contexto el agotamiento del modelo neoliberal se ha expresado crecientemente, en términos del pensamiento dominante, como crisis de las finanzas públicas. Acorde con las recetas impulsadas por los organismos internacionales de crédito, esta situación se tradujo en reiterados intentos de profundización de las políticas de desmantelamiento, privatización y reducción del sector público, en algunos casos acompañadas con propuestas de reformas impositivas dirigidas a aumentar los tributos sobre el consumo. Estas políticas desencadenaron y enfrentaron prolongados e intensos conflictos encabezados por los asalariados del sector estatal. Señalábamos ya el crecimiento que, respecto al primer cuatrimestre del año, muestran las acciones protagonizadas por estos colectivos de trabajadores. Su significación, en términos de la conflictividad general del período, queda de manifiesto en tanto éstos representan casi el 23% de los hechos relevados y explican el 70% de las protestas de los asalariados ocupados. Este nuevo ciclo de protestas de los trabajadores públicos reactualiza, en cierto sentido, con una radicalidad e intensidad superior, aquel que signó el último cuatrimestre del año 2000 cifrado fundamentalmente alrededor de la disputa sobre la confección y aprobación de los presupuestos públicos del presente año.

En su amplitud y particularidad vale resaltar las luchas –en Bolivia y Colombia– contra la aprobación de proyectos legislativos que, bajo diferentes formas, sancionan la descentralización educativa y sanitaria; la larga serie de protestas en demanda de recomposiciones salariales en Brasil –protagonizadas por los funcionarios públicos federales, los profesores universitarios y distintos cuerpos de las fuerzas policiales; las movilizaciones contra la reducción presupuestaria, salarios y condiciones de trabajo, y contra la privatización de los institutos de seguridad social en Centroamérica; el prolongado conflicto educativo en México por aumento salarial, las manifestaciones de cuestionamiento a la privatización de empresas pú-

blicas (Ecuador, Paraguay, Brasil, Argentina) y la intensa y prolongada cadena de paros, concentraciones y cortes de ruta en Argentina –a nivel nacional y provincial– contra la aplicación de la Ley del Déficit Cero. Para apreciar su significación en el conjunto de los hechos registrados en los diferentes países puede consultarse el cuadro N° 1.

Discriminadas por su pertenencia sectorial puede decirse que un 34% de las acciones son desarrolladas por maestros y profesores mientras que los empleados administrativos encabezan un tercio de las mismas. En muchos casos las formas de la protesta adoptan la modalidad de paros prolongados –incluso por tiempo indeterminado– y se articulan tanto en la forma de huelga nacional convocada por las centrales sindicales (Colombia 7/6, Argentina 19/7) como con procesos de movilización –locales y nacionales– en los que participan distintos actores, particularmente en el sector educativo con la presencia de estudiantes y padres. Estas articulaciones multisectoriales están presentes, desde el inicio, en las protestas contra las reformas impositivas, especialmente en Guatemala en el ciclo de manifestaciones en cuestionamiento al alza del IVA (Cuenca Saravia y Páez Montalbán, 2001).

■ **Trabajadores ocupados y desocupados: las dos caras del desempleo**

Si consideramos a la región en su conjunto, la protesta social que involucra a los asalariados del sector privado ha experimentado también un crecimiento importante (43%), aunque menor respecto de los colectivos reseñados anteriormente, representando un tercio de las acciones llevadas adelante por los trabajadores ocupados. La distribución por país de estas luchas es desigual, apareciendo en general bajo formas localizadas y, en muchos casos, inscritas en situaciones defensivas (cierre de los establecimientos, despidos, rebajas salariales, etc.). Estas características son tanto expresión en el sector privado de la crisis económica anteriormente señalada –que adopta diferentes intensidades en cada país– como resultado de una particularmente desfavorable relación de fuerzas que cristalizó, entre otras consideraciones, con la implementación de políticas de precarización

laboral acompañadas, en muchos casos, por altos índices de desocupación. De este conjunto se destacan, en el sector industrial, el conflicto de la construcción civil en Perú en demanda de la rehabilitación del convenio colectivo, la huelga de trabajadores de la industria pesquera que se extiende a varias regiones de Chile en reclamo de un alza salarial y mejores condiciones de trabajo, así como el paro de los trabajadores de Volkswagen en México por aumento salarial. En el mismo sentido, también pueden citarse los diversos conflictos en distintas “maquilas” de la región centroamericana ante despidos y persecución sindical. En el caso de los trabajadores del sector servicios puede mencionarse la prolongada lucha de los empleados de Aerolíneas Argentinas –que aunque con participación del estado argentino, tiene como accionista mayoritario al estado español a través de la entidad SEPI– frente a los despidos y ante la amenaza de la disminución salarial, empeoramiento de sus condiciones laborales y quiebra de la empresa.

Por otra parte las acciones promovidas por trabajadores desocupados casi se duplican en el presente período representando el 4% de la conflictividad general y el 11% del conjunto de las acciones impulsadas por los trabajadores con o sin empleo. Sus protestas aparecen, con cierta intensidad, en otros países (especialmente en Chile, Uruguay y Panamá) además de en Argentina que, como ya lo habíamos reseñado en el número anterior, concentra más de la mitad de los conflictos protagonizados por estos colectivos registrados para la región. En este caso el movimiento de trabajadores desocupados, bautizado localmente como “piquetero” en relación al uso del corte de ruta como medida de lucha, constituyó, en el período que estudiamos, un espacio de coordinación nacional –la Asamblea de Organizaciones Populares, Territoriales y de Desocupados– y jugó un rol significativo en la articulación del conjunto de la protesta contra el ajuste a partir del plan de lucha de cortes de ruta progresivos aprobado en la primera asamblea. Diferentes análisis sobre esta experiencia son reflejados en el dossier central del presente número y nos eximien de extendernos aquí sobre la cuestión. Vale sí resaltar la afirmación de movimientos similares en otros países latinoamericanos. En Panamá las luchas del movimiento de desocupados de la ciudad de Colón; en Chile algunos cortes de

ruta aislados que se continúan en la marcha de desocupados –de Temuco hasta Santiago– promovida por la CUT en reclamo a las comunas y al gobierno nacional de planes especiales para cesantes; y, por último, en Uruguay distintos movimientos de desocupados constituyen, luego de dos días de convención, la Unión de Trabajadores Desocupados que, junto con la Federación Unificadora de Cooperativas de Viviendas (FUCVAM), impulsa la manifestación del 10/8 en Montevideo en reclamo de subsidios estatales, empleo a partir de obras públicas y exoneración del pago de impuestos al agua y la energía eléctrica a los desocupados.

■ Las luchas contra los efectos del modelo agrario neoliberal

Durante el período analizado, el sector agrario es una vez más un destacado escenario de diversas protestas que señalan la importancia del mismo como “espacio” y “territorio” del conflicto social en la región. Si bien los conflictos de origen campesino-indígena se sitúan por debajo de los registros del período precedente (8,4% contra 12,12% respectivamente), el significativo aumento de los contenciosos protagonizados por los pequeños productores agrícolas sitúa al conjunto de la conflictividad rural (sumados estos dos sectores) en un 11,04% del total de los registros del período. Es preciso también señalar la existencia –al igual que para enero-abril de 2001– de algunas protestas de carácter multisectorial contra las políticas de ajuste protagonizadas por sectores campesinos que, en algunos países, convocan la participación de otros actores urbanos o bien en las cuales los primeros confluyen junto a sindicatos, movimientos estudiantiles, etc.

Los paros nacionales agrarios de Bolivia y Colombia (a finales de julio) y los cortes de rutas protagonizados por diferentes organizaciones campesinas del Paraguay contra la política económica y en demanda de créditos constituyen algunos de los conflictos más destacados del sector. Asimismo la lucha por la tierra de las comunidades indígenas en Chile, de los trabajadores rurales sin tierra de Brasil y las protestas de diferentes comunidades indígenas mexicanas (particularmente en Chiapas) con-

tra la aprobación de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena ocupan un lugar preponderante en el escenario de los conflictos del período. A estos deben sumarse una multiplicidad de luchas protagonizadas por pequeños productores agrarios (México, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala, etc.) vinculados a la caída de los precios de numerosos productos agrícolas, el impacto de las importaciones facilitadas por los procesos de apertura comercial en la región, la falta de créditos accesibles en este sector, entre otras cuestiones.

Durante el mes de junio el altiplano norboliviano (Los Yungas) fue nuevamente el escenario de numerosos cortes de ruta contra la militarización de esta región impuesta por el gobierno para continuar con la delimitación del cordón legal de las zonas de cultivo de coca. Las acciones se intensifican y extienden regionalmente (bloqueos de caminos contemplados en el Plan Pulga) en el mes de julio luego de la muerte de dos campesinos, desembocando en un Paro Nacional Agropecuario con el objetivo de derogar la Ley IN-RA, obtener créditos para el desarrollo de la economía campesina, solicitar al gobierno el cese de las importaciones de productos que puedan producirse en el país y la condonación de las deudas bancarias.

En Brasil, Paraguay, El Salvador y Chile se suceden diversas protestas por la ocupación de tierras. En el país andino el conflicto mapuche se caracteriza por una brutal represión de dichas comunidades, la criminalización y el procesamiento de los líderes indígenas y la ausencia de canales de diálogo para la resolución del conflicto (de la Cuadra, 2001). En diferentes estados de México (Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Querétaro, etc.) se producen diversas manifestaciones indígenas contra la aprobación por parte de los parlamentos locales de la Ley sobre Derechos y Cultura Indígena en las que participan amplios sectores sociales (AA.VV. “El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas”, 2001).

Durante quince días (finales de julio hasta el 10 de agosto) se desarrolló en Ecuador la primera Marcha por la Vida rumbo a la ciudad de Quito en la que participaron indígenas y campesinos junto a otras organizaciones sociales para manifestar el rechazo a la política económica. Esta marcha fue

acompañada por movilizaciones locales en distintas ciudades del país.

El significativo aumento de los conflictos protagonizados por pequeños productores agrarios y sectores campesinos parece resultar de una profundización del impacto recesivo del “modelo agrario neoliberal” en la región. La combinación de una rápida apertura comercial, las desventajosas condiciones de acceso y de pago de crédito son reivindicaciones que, de forma recurrente, recorren el conjunto de este tipo de protestas en países con un importante componente agrario de sus economías. En este contexto, la caída de precios internacionales de numerosos productos agrícolas, sumada a las fuertes sequías en algunos países centroamericanos y a la crisis económica, vienen a agravar las dificultades estructurales del agro generadas por las políticas para el sector.

El Paro Nacional Agrario por tiempo indeterminado en Colombia contra la política neoliberal del gobierno y sus consecuencias en el campo, convocado por la Asociación Nacional de Salvación Agropecuaria a finales de julio, es una de las protestas más destacadas de este tipo. Entre las reivindicaciones más significativas cabe señalar el pedido de condonación de deudas de los productores y el cese de facilidades a las importaciones de productos agrícolas. La represión del conflicto, que se hizo sentir de manera particular entre los cafetaleros de Huila, dejó un saldo de dos campesinos muertos y varios heridos. Al cabo de más de quince días de bloqueos multitudinarios de rutas, las organizaciones de agricultores y campesinas –con el apoyo de diversas centrales sindicales– obtuvieron algunas de las reivindicaciones más significativas.

Asimismo, México presenta numerosas protestas de campesinos y pequeños productores en diferentes estados de la Unión: viticultores, productores de piña y de caña, maiceros, productores de trigo, etc. Un análisis detallado de las principales demandas permite observar el vínculo entre éstas y las consecuencias del TLCAN en la agricultura mexicana: venta de energía eléctrica, diesel, insumos agrícolas y fertilizantes a precios similares a los de Estados Unidos, y revisión de los capítulos agropecuarios y forestal del TLCAN. A inicios de agosto se conforma el Frente Nacional de Defensa de la Agricultura Mexicana que, al igual

que en el paro agrario colombiano, rechaza el ALCA, y el 8 del mismo mes tienen lugar en la Ciudad de México y en otras ciudades del país manifestaciones para exigir un cambio en la política agropecuaria nacional. En la capital del país los manifestantes, con el apoyo de representantes de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC), reclaman por una agricultura fuera de la Organización Mundial de Comercio, más presupuesto para el agro, la expulsión de las multinacionales que cultivan transgénicos, que las sociedades mercantiles no tengan el derecho de acceder a la tierra, elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación, revisar los acuerdos comerciales sobre biodiversidad y que se discuta un acuerdo nacional para el campo mexicano además de rechazar la Ley Indígena y el neoliberalismo.

A los casos señalados se suman las protestas con cortes de caminos de los productores lecheros de Chile en contra de la reducción del precio de la leche y su importación; el paro por tiempo indeterminado de la Asociación de Bananeros del Ecuador en rechazo del incumplimiento del pago del precio oficial de la caja de banano por parte de los exportadores y comerciantes de fruta; los reclamos de un fondo específico para el sector de los caficultores hondureños y las protestas de los productores de arveja en Guatemala en repudio a los precios que ofrecen las empresas exportadoras, entre otras.

Es preciso señalar la aparición cada vez más recurrente de conflictos vinculados a la ocupación/expropiación de tierras de comunidades indígenas y campesinas con el objetivo de una explotación intensiva de recursos naturales y energéticos por parte de grandes empresas transnacionales.

Por último cabe consignar el registro de protestas campesinas en Bolivia y Colombia ligadas a los desplazamientos de poblaciones agrarias resultantes de la política de fumigaciones de las plantaciones de coca impulsada por los Estados Unidos en la región. Estos hechos, consecuencia de la intensificación del Plan Colombia (Zuluaga Nieto, 2001), muestran, junto a los primeros registros de campamentos de la guerrilla colombiana en plena selva ecuatoriana y los desplazamientos señalados, los efectos desestabilizadores

de la creciente presencia norteamericana en la cuenca andino-amazónica.

En el plano económico-comercial el nuevo acuerdo alcanzado entre El Salvador, Nicaragua, Honduras, Guatemala y Costa Rica y Panamá sobre el Tratado de Libre Comercio (TLC) que regiría a partir del año 2002, parece ratificar un cierto fortalecimiento de la política de desregulación comercial en la región sostenida por el gobierno norteamericano. En este sentido también es preciso señalar la declaración conjunta firmada a mediados de junio por representantes de los gobiernos de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Belice y Panamá en la que lanzan oficialmente la consigna de ejecutar de inmediato el Plan Puebla Panamá (Alvarez Béjar, 2001) –PPP, acordado por Vicente Fox y George Bush– en la que se destacan la interconexión energética, la integración de los servicios de telecomunicación y la creación de un corredor vial, así como fomentar la constitución del TLC en la región.

En los albores de 1994 el surgimiento del movimiento zapatista simbolizaba la aparición del primer movimiento social de envergadura opuesto al TLCAN y sus consecuencias. Las tensiones sociales producidas por los efectos de la liberalización comercial en el agro latinoamericano nos inducen a pensar que los conflictos analizados pueden comenzar a desplegarse de forma más regular y duradera en el tiempo. La lucha contra el modelo de libre comercio (TLCAN, ALCA, etc.) impulsado por los Estados Unidos y los gobiernos neoliberales de la región y contra sus efectos sobre la vida cotidiana de millones de personas podría así constituirse en un punto de confluencia y articulación de un amplio arco social opuesto a la política comercial y geoestratégica de los Estados Unidos en Latinoamérica.

■ El movimiento estudiantil y los movimientos urbanos

Como mencionáramos en la presentación de este artículo los conflictos del sector estudiantil presentan (en términos absolutos) un significativo incremento en relación al período anterior. Así, el conjunto de las protestas estudiantiles representan el 9,07%

del total de los conflictos (contra el 8,4% del cuatrimestre anterior).

En un contexto de profundización de las políticas de ajuste y de creciente mercantilización de la educación pública, en diversos países se registran conflictos contra los recortes en la educación, por aumento de presupuesto y en defensa de la enseñanza pública, gratuita y de calidad. En Brasil la UNE (União Nacional de Estudantes – universitarios) y la UBES (União Brasileira de Estudantes Secundaristas) protestan contra la iniciativa del Ministro de Educación tendiente a quebrar el monopolio que tienen estas organizaciones en la emisión de tarjetas estudiantiles. Del mismo modo, las protestas estudiantiles más significativas se suceden en Chile, Nicaragua y Guatemala.

Durante los meses de mayo y junio los estudiantes universitarios chilenos se movilizan en rechazo a la privatización del sistema de crédito universitario. A mediados de mayo la Confederación de Estudiantes de Chile (CONFECH) organiza una marcha en la ciudad de Santiago en la que participan entre cinco y ocho mil estudiantes, acompañada por tomas de facultades y manifestaciones en varios puntos del país. A finales del mismo mes la CONFECH organizó tres jornadas de protesta exigiendo la designación de 3 mil millones de pesos para el crédito universitario, y más de 30 mil estudiantes de siete universidades ubicadas al sur del país inician un paro indefinido acompañado de tomas, huelgas de hambre y manifestaciones que, en numerosos casos, son reprimidas.

El alza en las tarifas de los transportes urbanos en Nicaragua fue el detonante de un proceso de protestas y movilizaciones encabezado, en los meses de mayo y junio, por diferentes organizaciones estudiantiles de todo el país. En el marco del “Plan de Protesta para Evitar el Alza” otras organizaciones sociales como el Movimiento Comunal, la Federación de Trabajadores de la Salud (FETSALUD), la Coordinadora de Asentamientos Humanos Espontáneos y Mercados (CAHEM), el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), realizaron llamamientos a los trabajadores para no pagar el aumento de tarifas y confluyeron con las protestas estudiantiles reclamando al gobierno que subsidie el alza del transporte.

Por último, en Guatemala, los estudiantes, en confluencia con maestros y sindicalistas, reclamaron contra el incremento del IVA.

Al igual que los conflictos estudiantiles, las luchas de los movimientos urbanos se acentúan en estos meses. Así, en Chile dichas protestas responden esencialmente a demandas por vivienda y al rechazo, manifestado a través de cortes de ruta, de la instalación de un vertedero de basura en Rancagua (Sexta Región). En República Dominicana, donde los conflictos urbanos representan el sector con mayor número de registros en este cuatrimestre, la dinámica de la protesta se articula en torno al rechazo de aumentos de las tarifas en el servicio eléctrico. En Guatemala importantes protestas de vecinos ocurren como consecuencia del incremento del IVA y para cuestionar la aprobación del paquete de medidas fiscales, mientras que en Panamá se registran protestas urbanas contra el aumento del transporte y en demanda de agua potable.

■ A modo de conclusión

Hemos presentado en las líneas precedentes las configuraciones que han asumido los principales hechos de protesta acontecidos a lo largo del segundo cuatrimestre del presente año. A los efectos del análisis general han quedado fuera de nuestra consideración las especificidades que signan y distinguen algunas experiencias nacionales, tales como, por ejemplo, los conflictos en el marco de la transición política en el Perú o el caso venezolano, por citar dos solamente. Por el contrario, en esta oportunidad, hemos querido dar cuenta de las características que muestra el aumento de la conflictividad social en la región. La misma es expresión, en cierta medida, de una doble crisis. Esta nos remite, por un lado, a la profunda deslegitimación que cuestiona a las políticas neoliberales; y por otro lado, a la progresiva instalación de un contexto de crisis económica, que ha significado –para una gran parte de nuestros países aunque con intensidades diferentes– tanto el agravamiento de las regresivas consecuencias sociales que estas políticas implicaron como los intentos de profundización del rumbo de la ortodoxia fiscalista. Ante esta situación, las luchas que hemos descrito recorran el mapa de las resistencias sociales –con

sus puntos de fuerza y sus ausencias y debilidades– y señalan la capacidad social de cuestionar las políticas dominantes y de disputar, aún en sus inscripciones particulares y defensivas, la constitución de los caminos de salida a la doble crisis que mencionamos.

En este sentido, es distintivo el crecimiento de las formas de lucha que asumen un carácter más radical. Los bloqueos de caminos que ya se habían manifestado en las series de protestas en Argentina, Ecuador y Bolivia; se extienden como modalidad a otros países. Las huelgas, particularmente en los asalariados del sector público, tienden a asumir un carácter prolongado. Estos elementos parecen señalar una relativa declinación de las medidas “demostrativas”. Asimismo pueden indicar la constitución o fortalecimiento de las redes organizacionales indispensables al sostenimiento de estas formas de lucha. Por otra parte las caravanas o marchas prolongadas –a veces a pie– vuelven a aparecer en diferentes experiencias nacionales. El conjunto de estas modalidades puede ser interpretado también como prácticas de resocialización (reapropiación) de lo público privatizado bajo los efectos concentradores de la riqueza y el poder que caracteriza al modelo neoliberal. En esta dirección el cuestionamiento al carácter excluyente del modelo, y a éste mismo, se proyecta también al régimen político.

Frente a estas protestas la amenaza de la fuerza, la intimidación y la represión –que ya habíamos señalado en números anteriores– parece presentar ahora un carácter sistemático. A esta situación se suma, en este período, el asesinato de dirigentes sindicales y sociales, particularmente en Colombia, que despiertan nuestra más enérgica condena. La denuncia de estos hechos y la exigencia de castigo a los responsables es un compromiso ineludible.

Si bien todavía es difícil mensurar, en toda su amplitud, el impacto que tendrá sobre América Latina el nuevo contexto internacional abierto tras los atentados en EE.UU. y la intervención militar anglo norteamericana en Afganistán, la contraposición entre ajuste y democracia –que habíamos ya caracterizado para el período pasado– y las presiones diplomáticas y comerciales del gobierno norteamericano, se han profundizado acentuando la urgencia de los desafíos planteados.

Cuadro N° 1

	Cantidad de registros* de conflictos en el sector público (I)	Relación de (I) con el total de los conflictos de asalariados ocupados	Relación de (I) con el total de los conflictos del período
Argentina	76	60%	26,67%
Bolivia	22	73%	21,15%
Brasil	30	79%	35,29%
Chile	12	32%	6,38%
Colombia	18	82%	9,33%
Ecuador	26	96%	50,98%
El Salvador	11	69%	18,97%
Guatemala	4	66%	4,40%
Honduras	47	92%	55,95%
México	63	85%	32,64%
Nicaragua	11	69%	14,29%
Panamá	15	53%	12,40%
Paraguay	21	95%	28,77%
Perú	31	53%	22,79%
Puerto Rico	6	97%	23,08%
Rep. Dominicana	11	78%	17,46%
Uruguay	24	56%	31,58%
Venezuela	35	78%	35,35%
TOTAL	463	70%	23,12%

* Se consideran únicamente las protestas protagonizadas por los asalariados del sector público y no aquellas en las que éstos participan junto a otros sectores.

■ **Bibliografía**

AA.VV. 2001 “El zapatismo y los derechos de los pueblos indígenas” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Alvarez Béjar, Alejandro 2001 “El Plan Puebla Panamá: ¿desarrollo regional o enclave transnacional? en *OSAL* (Buenos Aires) N° 4, Junio.

Cuenca Saravia, Breny y Páez Montalbán, Rodrigo 2001 “Las luchas sociales en Centroamérica, mayo-agosto de 2001” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Chesnais, François 2001 “Prólogo a la edición argentina” en *La mundialización financiera, génesis, costos y desafíos* (Buenos Aires: Losada).

de la Cuadra, Fernando 2001 “Conflicto Mapuche: génesis, actores y perspectivas” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

Zuluaga Nieto, Jaime 2001 “Colombia: conflicto social, guerra prolongada, negociación de paz incierta” en *OSAL* (Buenos Aires) N° 5, Septiembre.

■ **Notas**

1 Agradecemos especialmente la colaboración de Ivana Brighenti y de todo el equipo del OSAL.

2 Por las limitaciones propias del espacio disponible en la revista, las cronologías publicadas sólo consideran los principales hechos de protesta social del período. En base a las versiones completas de las mismas, se elaboran los índices utilizados en esta nota para el análisis de la conflictividad general.